

Señor:

Juez Administrativo del Circuito Oral de Guadalajara de Buga - Reparto
E.S.D.

Referencia: Demanda Contenciosa Administrativa de Medio de Control de Reparación Directa
art. 140 del CPACA.

Demandantes: José María Meza Meza y otros.

Demandados: La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración de
Justicia – Fiscalía General de la Nación – Agencia Nacional de Defensoría Jurídica del Estado.

WILLIAM ALEJANDRO APONTE LONDOÑO, mayor de edad y vecino del municipio de Tuluá – Valle del Cauca, identificado con la cédula de ciudadanía número 89.005.695 expedida en Armenia – Quindío, abogado titulado, portador de la tarjeta profesional número 153.143 del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del poder conferido por los señores **José María Meza Meza**, **Erminda Castañeda Villamil**; **Yohanna Aislen Meza Castañeda**, **Hans Peter Hernández Herrera**, quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad **Jerónimo Hernández Meza**; **Ilba Yaneth Meza Castañeda**, **José Gregorio Lastre Vega**, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad **Juan José Lastre Meza** y **Verónica Lastre Meza**, mayores de edad y con domicilio y residencia en Santa fe de Bogotá D.C.; todos mayores de edad y con domicilio y residencia en el Distrito Capital de Bogotá, por medio del presente escrito presento demanda ordinaria contencioso administrativa de Medio de Control de Reparación Directa (art. 140 del CPACA), en contra de La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia, representada legalmente por la doctora **Celinea Orostegui de Jiménez** en calidad de **Directora Ejecutiva de la Administración de Justicia** y la **Fiscalía General de la Nación** representada legalmente por el doctor **Luis Eduardo Montealegre Lynett** en su calidad de **Fiscal General de la Nación**, o por quien los represente o haga sus veces al momento de ser notificados del proceso, demanda que sustento de la siguiente manera:

I. DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES:

1.1 Parte demandante:

- 1.1.1 El señor **José María Meza Meza**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.053 expedida en Tunja.
- 1.1.2 La señora **Erminda Castañeda Villamil**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.351.404 expedida en Alban.
- 1.1.3 La señora **Yohanna Aislen Meza Castañeda**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.950.092 expedida en Bogotá.
- 1.1.4 El señor **Hans Peter Hernández Herrera**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.005.977 expedida en Bogotá.
- 1.1.5 El menor de edad **Jerónimo Hernández Meza**, identificado con la tarjeta de identidad No. 1.140.916.155, quien es representado por sus padres **Yohanna Aislen Meza Castañeda** y **Hans Peter Hernández Herrera**.

- 1.1.6 La señora **Ilba Yaneth Meza Castañeda**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.369.923 expedida en Bogotá.
- 1.1.7 El señor **José Gregorio Lastre Vega**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.097.560 expedida en Galeras.
- 1.1.8 El menor de edad **Juan José Lastre Meza**, identificado con la tarjeta de identidad No. 1.028.481.979, quien es representado por sus padres **Ilba Yaneth Meza Castañeda** y **José Gregorio Lastre Vega**.
- 1.1.9 La menor de edad **Verónica Lastre Meza**, identificada con el registro civil de nacimiento No. 1.028.487.471, quien es representado por sus padres **Ilba Yaneth Meza Castañeda** y **José Gregorio Lastre Vega**.

1.2. El Apoderado parte demandante:

El suscrito, **William Alejandro Aponte Londoño**, mayor de edad domiciliado y residente en el municipio de Tuluá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.005.695 expedida en Armenia, abogado titulado y en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 153.143 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuó en el presente proceso como apoderado de la parte demandante, según poder debidamente conferido y cuya personería solicito me sea reconocida por su despacho.

1.3. Parte demandada.

- 1.3.1. **Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la administración de justicia.** Entidad de Derecho Público, representada para efectos jurídicos por la Doctora **Celinea Orostegui de Jiménez** en calidad de **Directora Ejecutiva de la Administración de Justicia**, o quien hiciere sus veces al momento de la notificación, a quien se le notificara el auto admisorio de la demanda en los términos de la ley 1437 de 2011, a fin de que comparezca como parte demandada.
- 1.3.2. **Fiscalía General de la Nación.** Entidad de derecho público, representada para efectos jurídicos por el doctor **Luis Eduardo Montealegre Lynett** en su calidad de **Fiscal General de la Nación** o quien hiciere sus veces al momento de la notificación, a quien se le notificara el auto admisorio de la demanda en los términos de la ley 1437 de 2011, a fin de que comparezca como parte demandada.

Los demás datos de la demanda corresponden a este con las formalidades indicadas en el artículo 175 del CPACA (ley 1437 de 2011).

- 1.4. **La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.** Solicito señor juez que en cumplimiento a la ley se le corra traslado de la demanda a la agencia nacional de defensa jurídica del estado, representada legalmente por la doctora **Adriana Guillen Arango**, en su calidad de **Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado** o quien hiciere sus veces al momento de la notificación.
- 1.5. **En interés de legalidad:** Actuar como parte el **MINISTERIO PUBLICO**, representado por el señor Procurador Judicial ante su despacho, a fin de que intervenga en el proceso en interés del orden jurídico; funcionario a quien se le deberán notificar todas las providencias que emanen del presente proceso. Artículo 303 del CPACA (Ley 1437 de 2011).

II. PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

Con fundamento en los hechos que expondré y previos los tramites del proceso contencioso administrativo, consagrado en el capítulo V, artículos 179 y s.s. del CPACA, respetuosamente promuevo ante su despacho Medio de Control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 del CPACA, para lo cual con todo comedimiento me permito solicitar se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

Primera. Declárese que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales, derivados de la restricción y privación injusta de la libertad de que fue víctima **José María Meza Meza**, en el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2012 hasta el 17 de julio de 2013, como resultado de la actuación cumplida dentro de la investigación penal adelantada en su contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la cual culminó con **SENTENCIA ABSOLUTORIA DEFINITIVA NO. 044** del 17 de julio de 2013, proferida por el juez segundo penal del circuito de Tuluá, en hechos imputables a la Fiscalía General de la Nación, ocurridos en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia.

Segunda. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, Son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes **José María Meza Meza**, **Erminda Castañeda Villamil**, **Yohanna Aíslen Meza Castañeda**, **Hans Peter Hernández Herrera**, **Jerónimo Hernández Meza**, **Ilba Yaneth Meza Castañeda**, **José Gregorio Lastre Vega**, **Juan José Lastre Meza** y **Verónica Lastre Meza**

Tercera. Condenar a La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia y la Fiscalía General de la Nación como reparación del daño ocasionado, a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, todos los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de ciento ochenta y seis punto siete salarios mínimos legales mensuales vigentes para **José María Meza Meza**, ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para su compañera permanente, **Erminda Castañeda Villamil**; ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para su hija **Yohanna Aíslen Meza Castañeda**, veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes para su yerno **Hans Peter Hernández Herrera**, cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para su nieto **Jerónimo Hernández Meza**; ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para su hija **Ilba Yaneth Meza Castañeda**, veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes para su yerno **José Gregorio Lastre Vega**, cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para su nieto **Juan José Lastre Meza** y cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para su nieta **Verónica Lastre Meza**.

Cuarta. Como medida de satisfacción y Teniendo en cuenta los planteamientos del Honorable **CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA**, sobre la justicia restaurativa o correctiva, con la cual se busca reparar integralmente el daño antijurídico ocasionado, así como la violación a los derechos a la libertad personal, la dignidad y a la honra de la que fueron víctimas **José María Meza Meza** y su familia en el caso que nos ocupa, se solicita:

Se ordene al señor Fiscal General de la Nación o en su defecto al Director Seccional de Fiscalías de Buga, (Valle), pida excusas públicas por los daños ocasionados a **José María Meza Meza** y a sus familiares, por intermedio de publicación que se hará efectiva en un diario de amplia circulación Nacional y/o Departamental.

Quinta- Condénese a la **DEMANDADA** al pago de las costas procesales y agencias en derecho.

Sexta- La Demandada deberá pagar, los valores a que fuere condenada dentro de los términos previstos en los artículos 192 de la ley 1437 de 2011 CPACA.

III. HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO PARA LAS PRETENSIONES:

Primero.- El día diecinueve (19) de septiembre de 2012 el señor **JOSE MARIA MEZA MEZA** en su condición de motorista del vehículo clase camión, de color azul marca FORD modelo 2005 YHK 296 de servicio público, afiliado a la Empresa de Transportes Rodrigal, fue contratado por la Empresa Continental de Transportes de Cali, para acarrear desde la ciudad de Cali con destino a Bogotá, una carga de DOS MIL CIENTO KILOS de aleación de ALUMINIO Y PLOMO más una camioneta de marca TOYOTA RAV4, COLOR PLATA, DE PLACAS BLX019 de Bogotá, por la cual se le pagaría un valor de \$850.000, desconociendo **JOSE MARIA MEZA** el contenido de lo que era enviado al interior de la mencionada camioneta Toyota.

Segundo.- El mismo día veinte (20) de septiembre de 2012 a eso de las 01:40 A.M. horas oficiales de policía que se encontraban realizando un retén de control y prevención en la vía Cali- Andalucía KM 78 más 350 metros, concretamente en el peaje de BETANIA, hacen señal de pare al vehículo conducido por **JOSE MARIA MEZA MEZA**, procediendo a verificar el contenido de la mercancía transportada, esto es unos LINGOTES DE PLOMO (320) número 45ZANACZ400, color amarillo y plata, y sobre este tendido un vehículo CAMPERO MARCA TOYOTA de placas BLX 019, solicitando al conductor los documentos de la carga, los cuales fueron exhibidos en debida forma por **JOSE MARIA MEZA MEZA**.

Tercero.- Al realizar una revisión al vehículo CAMPERO MARCA TOYOTA de placas BLX 019, que era transportado en el camión que conducía **JOSE MARIA MEZA MEZA**, los agentes del orden encontraron una maleta de color negro, marca Samsonite, la cual contenía cinco (05) pacas de una sustancia que resultó ser preliminarmente positiva para **MARIHUANA CON UN PESO NETO DE TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO (3.805) GRAMOS**.

Cuarto.- En audiencias preliminares de control de garantías, surtidas ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro, se legalizó el procedimiento de incautación de la evidencia y suspensión del poder dispositivo de los vehículos, la captura del acusado, se formuló imputación y por parte de la defensa técnica se solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, petición que fue acogida por el juzgado.

Quinto.- El proceso se radicó inicialmente en la FISCALIA 34 SECCIONAL, de Tuluá, radicado bajo el número SPOA 768346000187201203140.

Sexto.- El Fiscal 34 Seccional de Tuluá, continuando el ritual procesal, presentó escrito de acusación fechado el nueve (9) de noviembre de 2012, con recibido en el centro de servicios judiciales el día trece (13) de noviembre de 2012, por medio del cual la FISCALIA 34 SECCIONAL DE TULUA formuló acusación en contra del señor **JOSE MARIA MEZA MEZA** AL CONSIDERAR QUE LOS PRESUPUESTOS A QUE ALUDE EL ARTICULO 336 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL SE DABAN CON SUFICIENCIA, EN TANTO QUE, DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS, EVIDENCIAS FISICAS E INFORMACION LEGALMENTE OBTENIDA, SE PODÍA AFIRMAR CON PROBABILIDAD DE VERDAD, NO SOLO QUE LA CONDUCTA DELICTIVA EXISTIÓ, SINO QUE EL SEÑOR **JOSE MARIA MEZA MEZA** ERA AUTOR DEL DELITO DE FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, TIPIFICADO EN EL ART. 376 DEL CODIGO PENAL.

...En síntesis, esta era la premisa que debería dejar plenamente esclarecida la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, en orden a privar de la libertad al indiciado...!

Séptimo.- El día quince (15) de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tuluá, recibe el asunto y lo radica bajo la partida No. 76-834-31-04-002-2012-00235-00.

Octavo.- Durante el desarrollo del juicio oral, en audiencia del diecisiete (17) de julio de 2013, el representante de la Fiscalía General de la Nación doctor Francisco Nelson Ciro Saldarriaga, retiro los cargos al acusado.

Noveno.- El proceso radicado No. 76-834-31-04-002-2012-00235-00 adelantado ante el Juzgado Segundo Penal Del Circuito de Tuluá, culminó con Sentencia No. 044 de fecha diecisiete (17) de julio de 2013, con carácter de **ABSOLUTORIA POR RETIRO DE CARGOS**.

Decimo.- la sentencia No. 044 de 17 julio de 2013 proferida por el juzgado segundo penal del circuito de Tuluá, no fue apelada por las partes, razón por la que quedo debidamente ejecutoriada.

Décimo Primero.- La sentencia absolutoria, dejo sin piso jurídico la imputación que le formulo la FISCALIA, al señor **José María Meza Meza**, la misma que le significó la restricción a la libertad por el término de **NUEVE (9) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS**, privación de la libertad que de acuerdo a los resultados del proceso se torna injusta y por ello deberán las entidades convocadas indemnizar a la víctima y a su núcleo familiar.

Décimo Segundo. Que en virtud del requisito de procedibilidad se radico solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, presentándose la solicitud en fecha 13/07/2015, correspondiéndole el radicado 241075- 2015.

Décimo Tercero.- Que la diligencia de conciliación fue programada por el señor Procurador 60 judicial I para asuntos administrativos, doctor **Eduardo Silva Orozco**, para el día 17 de septiembre de 2015 a las 04:00 PM.

Décimo Cuarto. El día y hora indicado se adelantó la diligencia a la que acudió el doctor **Cesar Alejandro Viafara Suaza**, en representación jurídica de la Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia, quien manifestó que era decisión del comité de conciliación de la entidad no presentar propuesta de conciliación, para lo cual aporó certificación 224-15 del 8 de septiembre de 2015, igualmente el doctor Silvio Rivas Machado en representación de la Fiscalía General de la Nación, aporó certificación de fecha 5 de agosto de 2015 en la que el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad decide no presentar propuesta de conciliación.

Décimo Quinto. Como quiera que ninguna de las entidades convocadas presento fórmula de conciliación la misma se declaró fallida por parte del doctor **Eduardo Silva Orozco**, Procurador 60 judicial I para asuntos administrativos, quien suscribió el acta y constancia de fecha 17 de septiembre de 2015.

Décimo Sexto. Que los hechos por los que se demanda sucedieron entre el 20 de septiembre de 2012 hasta el 17 de julio de 2013, fecha en que el juez segundo penal del circuito de Tuluá, profirió sentencia absolutoria, sentencia quedo ejecutoriada ese día, dado que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación, por lo que es a partir del día 18 de julio de 2013 la fecha en la que se debe contar la **CADUCIDAD** de la acción, como quiera que la solicitud de conciliación ante la Procuraduría fue radicada el día 13 de julio de 2013, quedando aun cuatro (4) días para interponer la demanda, y teniendo en cuenta que la constancia de la Procuraduría Judicial es de fecha 17 de septiembre de 2015, el termino para instaurar la demanda se comienza a contar a partir del día 18 de julio de 2015, corriendo los días, 18, 19, 20 y 21 de septiembre, fecha en la que se cumplirían los 24 meses para instaurar la demanda, toda vez que el tiempo transcurrido entre el 13 de julio de 2015 hasta el 17 de septiembre de 2015 se suspenden los términos de caducidad.

Décimo Séptimo.- Los señores **José María Meza Meza**, **Erminda Castañeda Villamil**, **Yohanna Aislen Meza Castañeda**, **Hans Peter Hernández Herrera**, **Ilba Yaneth Meza Castañeda**, **José Gregorio Lastre Vega**, me han conferido poder para presentar la siguiente demanda.

IV. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:

Fundamento este proceso según lo preceptuado en los artículos 2, 5, 6, 13, 28, 29 y 90 de la Constitución Política; la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1.972, en lo que se refiere a la libertad y seguridad personal; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1.968; el Código Penal en lo atinente a los delitos contra la libertad individual y otras garantías; el Código de Procedimiento Penal; EL Estatuto de la Administración de Justicia, vigente para la época –Ley 270 de 1996, arts. 23, 27, 65 a 74-; jurisprudencia reiterada del **HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA**, sobre fallos de casos semejantes; y, todas las normas que sean acordes con la naturaleza del caso.

Con los actos imputables a la demanda se han violado las siguientes disposiciones de rango constitucional y legal.

Artículo 2. Constitución Política. Según el precepto consagrado en esa norma, la función del Estado, es ante todo, la de servir a la comunidad asociada en un estado de derecho y velar por la integridad de una perfecta convivencia y disfrute de las condiciones colectivas de vida mediante la utilización de los distintos servicios públicos a cargo del Estado. En consecuencia, el Estado como servidor delegado por el pueblo, está en la obligación de cumplir con sus objetivos, observando al máximo los cuidados y responsabilidades para no lesionar bajo ningún pretexto los derechos de los ciudadanos.

Artículo 6. Constitución Política. Consagra el artículo sexto de la carta política que los servidores públicos son responsables por infringir la constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 13. Constitución Política. Consagra este artículo que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados...

Artículo 28. Constitución Política. Derecho a la Libertad. Consagra este artículo que toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona, o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley...

Desde el punto de partida de la Constitución Política, a través del artículo 90 que trata sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, encajándolo con la ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia, a partir del artículo 65, donde se consagra la posibilidad de que el Estado – Juez, puede verse inmerso en la responsabilidad extracontractual, por el ejercicio de sus funciones, de tres maneras diversas, así: a) por privación injusta de la libertad; b) por el error jurisdiccional; y c) por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Con relación a la responsabilidad patrimonial del estrado a partir de la privación injusta de la libertad, como afectación al derecho fundamental a la libertad (art. 28 C.P.), la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativo ha perfilado que en los eventos donde se ventila la responsabilidad del Estado – Juez, una dogmática que hoy en día se guía en términos generales por la teoría del **DAÑO ESPECIAL**, esto es, bajo la fórmula de imputación objetiva, pues siendo una actividad legítima la que cumplen los organismos del Estado que tienen la tarea de perseguir la criminalidad, en ocasiones causa daños que los administrados con están obligados a soportar.

La línea jurisprudencial del Consejo de Estado en relación al tema de la privación injusta de la libertad es la siguiente:

Una primera línea jurisprudencial podría calificarse de restrictiva, bajo el entendido de que la responsabilidad del estado, por la privación injusta de la libertad de las personas, se fundamentaba en el error judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonable, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, se dijo que la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez que causa perjuicios a sus coasociados.

Posteriormente se indicó que la investigación de un delito cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manea que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.

Una segunda línea jurisprudencial entendió que en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P., absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir se esté incurrió en dolo o culpa. Se consideró, además, que en tales eventos la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad, pero que en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se exigiría al demandante acreditar el error jurisdiccional, derivado no solo del carácter "injusto" sino "injustificado" de la detención. En ese orden, se sostuvo que el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos. El primero, previsto en su parte inicial, señalaba que: "quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios", disposición que vendría a constituir una suerte de clausula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o ilegalidad de la detención. La segunda parte de la disposición, en cambio, tipificara los tres supuestos – absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o a conducta no estaba tipificada como punible – los cuales, una vez acreditados, darían lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de legalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigero el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, que implicaba imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada, al tiempo que amplió, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado fuese absuelto en aplicación del principio universal del in dubio pro reo.

Finalmente el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, sección tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, radicado 17.517 C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expreso:

"Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de dicho derecho, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P., o incluso se absuelva al detenido por in dubio pro reo, sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo privo del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad."

No cabe duda entonces, que el régimen aplicable, de manera típica, según la jurisprudencia dominante del Honorable Consejo de Estado, cuando se lesiona el derecho fundamental a la libertad es de naturaleza objetiva, inclusive en aquellos casos en que la absolución la propicia la aplicación del apotegma del in dubio pro reo, lo que permite afirmar que no interesa, en manera alguna, la conducta del funcionario judicial que dispuso la orden de captura o de detención, sino su real ocurrencia y la posibilidad de atribuirle a la entidad o entidades acusadas el daño antijurídico que de ello devino, todo bajo un examen normativo que dictamina la legitimidad de la interdicción judicial al derecho a la libertad.

Artículo 29. Constitución Política. Consagra este artículo que el debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es claro para todos los ciudadanos que los términos en materia de las diferentes jurisdicciones en ocasiones son difíciles de cumplir, pero como bien lo consagran el artículo 6 y 90 de la constitución política los funcionarios públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 90. Constitución Política. Responsabilidad Patrimonial del Estado. El artículo 90 de la Constitución Política dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación.

La Corte tuvo la oportunidad de analizar el alcance de la anterior disposición constitucional en la sentencia C-333/96 con Ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, señalando:

"Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional no es solo imperativo – ya que ordena al Estado responder – sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

...Por ello ha dicho esa misma Corporación (se refiere al Consejo de Estado) que ese artículo 90 "es el tronco en el que se encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátase de la responsabilidad contractual o extracontractual."

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, consagrado en los artículos 2, 58 y 90 de la Constitución, ampliamente desarrollado por vía jurisprudencial, y se configura por la concurrencia de tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, una actuación imputable al Estado y una relación de causalidad."

Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

La responsabilidad del Estado para su concreción requiere de los siguientes requisitos: a) Que se cause un daño; b) Que ese daño sea imputable, por acción u omisión, a una autoridad pública; y c) Que ese daño sea antijurídico.

Primero, el daño, como requisito esencial de toda responsabilidad, es el resultado de la conducta del sujeto responsable hacia una persona, que se debe traducir en un perjuicio patrimonialmente evaluable para el receptor de la acción u omisión estatal.

Segundo, la imputabilidad del daño es la atribución jurídica de reparar un daño causado que reposa en cabeza de un sujeto determinado. La imputación no puede realizarse con base en la sola causación material de daño, sino que debe sustentarse, "previa justificación de su procedencia, en otras razones o títulos jurídicos diferentes, ya sea la propiedad de la cosa que ha producido el daño,

177

la titularidad de la empresa en cuyo seno ha surgido el perjuicio, la dependencia en que respecto del sujeto responsable se encuentra el autor material del hecho lesivo, o cualquier otra".

Y tercero, La antijuridicidad del daño se contrae a que el sujeto que se soporta el daño no tenga el deber jurídico de afrontarlo.

En conclusión, el artículo 90 de la Carta dispone una garantía de las personas en defensa de sus derechos frente al comportamiento estatal.

Entonces, si analizamos los hechos que se cargan a la demandada, se puede ver meridianamente que la Fiscalía General de La Nación, está llamada a responder por los perjuicios de orden material y moral a los señores Luis Fernando Hernández Guerrero y Ángel María Martínez León, así como a su correspondientes grupos familiares, pues esa entidad pública a través de su representante esto es el Fiscal del caso, deberá responder por la falla en el servicio de administración de justicia que llevo a la privación injusta de la libertad, por espacio de seis meses y trece días.

La responsabilidad patrimonial del estado, requiere que se configuren tres aspectos, requisitos, los cuales para este caso son:

*"Cuando el Estado en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada **"falla o falta del servicio"**, o mejor aún falta o falla de la administración pública (falla probada), trátase de simples actuaciones administrativas, omisiones, hechos y operaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad del Estado, y requiere:*

*a. **Una falta o falla del servicio** o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración.*

*b. **Un hecho** que implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano.*

*c. **Un daño** que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como que sea cierto, determinado, determinable, etc.*

*d. **Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño**, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.*

Obvio, habrá casos de concausalidad, bien entre la falla y la culpa de la víctima, entre la falta y el hecho de un tercero o aún, entre la falla y la fuerza mayor o el caso fortuito en los cuales la responsabilidad del Estado quedará limitada en la proporción en que su falta o falla sea reconocida como causa eficiente del daño sufrido, presentándose entonces la figura conocida en el derecho como "compensación de culpas" o repartición de responsabilidades (conurrencia de culpas)

El Estado se exonera de toda responsabilidad cuando demuestra como causa del daño, culpa de la víctima, el hecho de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito, pues en el fondo lo que acredita es que no hay relación entre la falta o falla del servicio y el daño causado.

a) El hecho generador de la falla del servicio de la administración, plenamente establecido con los argumentos que anteceden.



178

Porque la Fiscalía General de la Nación como ente investigador y quien solicito la medida de aseguramiento de los señores Luis Fernando Hernández Guerrero y Ángel María Martínez León, para posteriormente imputar cargos y presentar escrito de acusación ha debido probar la responsabilidad penal de los acusados, tal como así lo ofreció hacer en sus escrito de acusación donde manifestó estar en la capacidad de demostrarle al estado y la señor juez que los acusados eran responsables de los delitos que les acuso, pero no fue así, y al contrario estas personas con el apoyo de un profesional del derecho lograron demostraron la inocencia que clamaron desde el inicio de la investigación y desde el momento en que fueron capturados, convirtiéndose inmediatamente en privación injusta de la libertad el tiempo que estuvieron reclusos en centro carcelario.

b) El daño cierto, la privación de la libertad, que implica el prolongado sufrimiento para el detenido y sus familiares, se le vulnero el derecho a la libertad, y que es la libertad si no el MAYOR ATRIBUTO DEL SER HUMANO.

Con la falla de la administración, sobrevino una situación de inmenso dolor para Luis Fernando Hernández Guerrero, Ángel María Martínez León y sus familias.

c) La relación de causalidad entre la falla del ente público y el daño cierto.

Es de mera lógica deducir que de no equivocarse la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados, es decir el Fiscal que solicito la medida de aseguramiento e imputo cargos y el Fiscal que Acuso a los ya imputados, no se había prolongado su detención en el tiempo, y para finalmente el propio Fiscal solicitar un fallo absolutorio por incapacidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

Inequivocamente, la actitud de la administración fue la causa eficiente del daño sufrido; en el fondo, lo que se evidencia es la relación de causalidad entre la falla y el daño causado, como se probara fehacientemente.

Para fundamentar las pretensiones de la demanda en relación con los perjuicios de orden moral y al daño en la vida en relación o perjuicios fisiológicos me permito aportar lo siguiente:

QUE ES EL DAÑO?

"El daño, en "su sentido natural y obvio", es un hecho consistente en el "detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien", "en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc..." y "supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo" (Sentencia de enero 27 de 2000. Expediente 10867. Actor: Juan Carlos González y otros. Consejero ponente doctor Alir Hernández Enríquez)

CONDICIONES DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO.

Personal, directo y cierto (o actual).

PERSONAL:

Porque se configura por la violación de los derechos subjetivos de la persona damnificada. No importa que esa violación provenga de un hecho que afecte en forma INMEDIATA A UNA PERSONA, o bien, que sea la repercusión de un daño sufrido por un sujeto y que, en virtud de la relación que este DAMNIFICADO DIRECTO TENGA CON OTRA PERSONA (*relación tenida en cuenta por el derecho*) se traduzca en una conculcación mediata de la esfera jurídica así ligada. En ambos supuestos el daño es PERSONAL por cuanto el damnificado ha sufrido un detrimento o perturbación desfavorable en su propia esfera jurídica, SEA O NO LA VÍCTIMA INMEDIATA DEL HECHO DAÑOSO.

Conforme con lo anterior, el agravio sufrido por la VÍCTIMA INMEDIATA, contrasta con el **daño reflejo** que es el menoscabo soportado por otra persona distinta del damnificado inmediato. El daño patrimonial y moral que se ocasiona a los parientes de la víctima, constituye el típico ejemplo de daño reflejo.

En alguna jurisprudencia se habla de víctima directa y víctima indirecta, que es aquella que recibe el daño por reflejo. Ver Sentencia de 13 de septiembre de 2001. Expediente 13326. Actor: Guillermo León Zapata y otros. Consejera Ponente Doctora Maria Elena Giraldo Gómez.

DIRECTO:

EL PERJUICIO INVOCADO POR LA VÍCTIMA TIENE QUE PROVENIR DEL DAÑO CAUSADO.

Dicho de otra manera: El carácter directo del daño supone el nexo de causalidad entre el daño (*alteración material exterior*) y el perjuicio (*consecuencias de dicha alteración sobre un patrimonio*). Hay que establecer que el perjuicio, entendido como la secuela del daño, sólo se repara si proviene de éste.

CIERTO:

Afirmar que el daño debe ser cierto, es lo mismo, en realidad, que expresar que el daño **debe existir** para que origine el derecho a obtener un resarcimiento.

Dicho de otro modo: Es el que se ha producido; es el perjuicio real sufrido por la víctima, es el que existe. Y es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio demostrando que ya se produjo (*actual o consolidado*) o que "**aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual**" o "**cuando es la prolongación de un perjuicio actual**" (*futuro o no consolidado*). El daño futuro sólo es indemnizable si se sabe con certeza que va a ocurrir.

EL PERJUICIO

TIPOLOGÍA DEL PERJUICIO

Es una clasificación de los distintos perjuicios reconocidos por la jurisprudencia.

Se han denominado por la doctrina **perjuicios de orden material y perjuicios de orden no material**.

1. PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL

Son aquellos que atentan contra bienes o intereses de naturaleza económica, es decir, valorables pecuniariamente. Son los que afectan el patrimonio económico de la víctima.

Son de dos clases:

- 1.1. **Daño emergente – damnum emergens:** (egreso patrimonial, desembolso). "*Hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del patrimonio de la víctima.*" (Tamayo Jaramillo De la responsabilidad civil T. 2 pag.117) Es una disminución efectiva del patrimonio.

180

La utilización del verbo rector contenido en el texto transcrito, en el tiempo futuro "saldrá", permite sustentar la posibilidad de indemnizar el daño emergente futuro, que es el que se proyecta con posterioridad al hecho dañoso.

- 1.2. Lucro cesante – *lucrum cessans* - : (falta de ingreso, no embolso) "...por el contrario, hay lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima" (Ob. Cit.). Es el beneficio o beneficios que dejan de obtenerse.

2. PERJUICIOS INMATERIALES

- 2.1. No tienen una naturaleza económica, en el sentido de que, por definición, no se les puede medir en dinero. La indemnización que se decreta con el otorgamiento de una suma de dinero frente a un perjuicio moral, no busca "el pago de las lágrimas" ("*las lágrimas no se monedean*"), ni del dolor producido por el hecho dañoso.

Hay que entender que esta indemnización tiene un carácter **compensatorio** en el sentido de que mediante la equivalencia en dinero se otorga a la víctima o a los demandantes un bien que le ayuda a aliviar su pena, a mitigarla. No se trata de que quede materialmente indemne, sino que tenga una suma de dinero que le haga más llevadera la pena y pueda sufrir en mejores condiciones la alteración emocional que le produjo la tragedia.

2.1. PERJUICIO MORAL SUBJETIVO:

Es el daño ocasionado en el ámbito afectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia dolor, sufrimiento, perturbación espiritual. Compromete básicamente la esfera afectiva o sentimental de la persona ocasionándole una perturbación, un dolor, un sufrimiento, que carece de sustento patológico. Lesiona al ser humano en sí mismo, sus efectos recaen sobre el ser humano en sí mismo, considerado como sujeto de derecho.

Es el que afecta el patrimonio emocional y afectivo de la víctima. Es la angustia, el dolor, la tristeza, el malestar, el sufrimiento que se experimenta por el impacto emocional del daño. Es la lesión que se padece en los sentimientos y los afectos. Se le ha llamado **perjuicio moral subjetivo o pretium doloris**, precio del dolor, como lo llamaron los romanos. También se le denomina "dolor de afección".

Por las características anotadas este perjuicio se liquida con la filosofía de proporcionar una **compensación** a los demandantes, ante la dificultad de reparar el daño causado.

Así se dijo claramente en una sentencia reciente:

"En relación con el perjuicio moral ha reiterado la Sala que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria¹ y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba". (Sentencia de abril 20 de 2005. Expediente 15247. Actor: Javier

¹ RENATO SCOGNAMIGLIO. *El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual*. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

Rojas Rivero y otros. Consejera ponente doctora Ruth Stella Correa Palacio –conscriptos)
(Subrayas fuera de texto)

181

En la obra "Responsabilidad Extracontractual del Estado" de Álvaro Bustamante Ledesma, sobre este tema, se lee:

"Estos perjuicios difieren sustancialmente de los materiales tanto por la naturaleza misma de los bienes afectados como por la posibilidad de su estimación económica. Los daños morales se localizan en la zona de mayor intimidad de la víctima, de los sentimientos, los afectos y el dolor en tal forma que sólo quien los padece puede determinar su verdad e intensidad, pues al no manifestarse exteriormente en una modificación del entorno material no son mensurables objetivamente. Si los daños morales únicamente producen efectos en el alma de quien los sufre su justiprecio no es factible y cualquier que se intente resulta inexacto.(...) corresponde específicamente al dolor íntimo, las angustias, los padecimientos que afectan los sentimientos de una persona. Esta clase de daño es la que se ubica en lo más íntimo del ser humano donde se queda sin manifestarse en el mundo exterior y esa circunstancia lo hace inasible, inmedible o determinable" (Pág. 233)

Cuantificar el dolor, las consecuencias psicológicas, personales o individuales, la tristeza, las angustias o trastornos emocionales que la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ocasionan, no es tarea fácil. No existen parámetros o elementos que permitan una cuantificación adecuada y justa, por lo cual la jurisprudencia ha establecido unos montos que apuntan a "compensar" el dolor experimentado, los cuales son determinados por el Juez en ejercicio de su arbitrio judicial.

Estos montos o parámetros, bien conocidos y reiterados en múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado se han establecido en el equivalente a 1.000 gr. de oro para la víctima (cuando sea procedente) y para los miembros de su núcleo familiar (cónyuge, padre, hijos, y en algunos casos abuelos), y 500 gr. del mismo metal para los hermanos.

El fundamento de esta cuantificación radica en un precepto del Código Penal de 1936, el artículo 95, que establecía:

"cuando no fuera fácil o posible avaluar pecuniariamente el daño moral ocasionado por el delito, podrá fijar el juez **prudencialmente** la indemnización que le corresponda al ofendido, hasta la suma de dos mil pesos"

Y este monto era el precio de 1.000 gr. de oro en ese momento histórico.

El patrón de los gramos oro para efectos de cuantificar el perjuicio moral subjetivo se cambió para fijar el **quantum** de las condenas por este concepto en moneda legal colombiana, de acuerdo con el artículo 178 del C.C.A. Y al considerar que el **salario mínimo mensual** en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral debe fijarse con base en el valor del salario mínimo legal.

RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL.

(En sentencia de 18 de octubre de 2000, Exp. 13288 Actor: Luis Felipe Castañeda. Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque se resumió la sentencia de José M. Gutiérrez Sepúlveda, así:

"... el reconocimiento de este perjuicio no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, sino que debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteran la vida de relación de las personas; tampoco debe limitarse su

² Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, exp: 14.950.

182

reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido además por las personas cercanas a ésta, como su cónyuge y sus hijos; ni debe restringirse a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, pues puede referirse además al esfuerzo excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo de la afectación sufrida por la persona en su relación con las demás, sino también con las cosas del mundo).

Luego de citar la sentencia de John Jairo Meneses Mejía y otros y la de septiembre 25 de 1977 María Edelmira Cano y otro, dijo:

"Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados "daño a la vida de relación" corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico que, en realidad, no podía ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial –distinto del moral– es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre.

De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir de diferentes hechos y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que como lo advierte el Profesor Felipe Navia Arroyo, únicamente permitiría considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, LA INTEGRIDAD FÍSICA. Así, aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad de provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude el Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral) que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que –al margen del perjuicio material que en sí misma implica– produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas.

Debe decirse, además, que este perjuicio extrapatrimonial puede ser sufrido por la víctima directa del daño O POR OTRAS PERSONAS CERCANAS A ELLAS, POR RAZONES DE PARENTESCO O AMISTAD, ENTRE OTRAS. Así, en muchos casos, parecerá indudable la afectación que –además del perjuicio patrimonial y moral– puedan sufrir la esposa y los hijos de una persona, en su vida de relación, cuando ésta muere. Así sucederá, por ejemplo, cuando aquellos pierden la oportunidad de continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas ofrecidas por su padre o compañero, o cuando su cercanía a éste les facilitaba, dadas sus especiales condiciones profesionales o de otra índole el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de determinadas relaciones provechosas que, en su ausencia, resultan imposibles.

El HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, al pronunciarse sobre situaciones fácticas similares a la presente, ha sentado el criterio que en casos de privación de la libertad que culminan con sentencia absolutoria por duda, carencia de certeza, sobre la responsabilidad del sindicado, el Estado está obligado a indemnizar el daño sufrido por la víctima, mismo que no se encontraban en la obligación jurídica de soportar.

183

Antecedentes jurisprudenciales, de los cuales extraemos algunos apartes:

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA.
Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00595-01(18960).

"La privación de la libertad (y dentro de ella la medida de detención preventiva) debe ser adecuada, esto es, cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho fundamental a la libertad personal".

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, SECCION TERCERA
SUBSECCION B. Consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, Radicación número: 25000-23-26-000-1996-02709-01(18626).

"...ha acogido el régimen de responsabilidad objetiva, por considerar injusta la privación de la libertad en cualquiera de los tres casos previstos por la norma. En consecuencia, resulta indiferente detenerse en el análisis de la providencia que ordenó la detención para concluir sobre la posible existencia de un error judicial, porque lo que compromete la responsabilidad del Estado no es la antijudicialidad de la decisión, sino la del daño sufrido por la víctima, por no estar en la obligación jurídica de soportarlo (...). En consecuencia, la indemnización de perjuicios, procede en los casos en los cuales quien estando privado de la libertad, sea exonerado en sentencia absolutoria definitiva o su equivalente...."

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: Gladys Agudelo Ordoñez, Sentencia del 26 de mayo de 2010, radicación 01001-23-31-000-1995-01672-01 (18467)

"...Una tercera tendencia jurisprudencial morigeró el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, que implicaba imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada, al tiempo que amplió, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado fuese absuelto en aplicación del principio universal del in dubio pro reo..."

En este sentido, la evolución jurisprudencial del H. Consejo de Estado ha contemplado que hay lugar a derivar responsabilidad patrimonial del Estado, por privación injusta de la libertad, cuando el sujeto sometido a la investigación, sea absuelto por ausencia de certeza en la convicción del Juez Penal sobre su responsabilidad en la comisión del hecho punible, evento en el que por mandato legal, la duda se debe resolver a favor del sindicado. En este sentido la Corporación ha sostenido:

"...aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo - de manera tal que no obstante haberse producido la privación de la libertad como resultado de la investigación e incluso habiendo sido proferida la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, el imputado no llega a ser condenado - circunstancia que hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos" (Se destaca)

"la posición actual de la sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 1997 y reiterada recientemente, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P.P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del "in dubio

³ Consejo de Estado - Sentencia de 2 de mayo de 2007; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

184

pro reo" pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de la buena fe y de presunción de inocencia y que, esa situación – que la privación sea injusta constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño que resulta, por tanto, imputable al Estado"⁴ (se destaca).

En ese orden, es válido inferir que así la medida de aseguramiento de detención preventiva se haya hecho conforme a las exigencias legales, la misma puede causar un daño antijurídico a quien la padece, cuando en el transcurso de la investigación penal no se logre desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado, quien en cumplimiento de esa orden legal, permaneció privado de uno de los derechos más valiosos del ser humano, cual es la libertad.

Además, siendo que la presunción de inocencia es una categoría de orden Constitucional, por virtud de la cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia, es obligación de las autoridades judiciales competentes obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado, de ahí que no se ajuste a los postulados constitucionales sostener que es deber jurídico del administrado soportar la detención preventiva que se haga en el marco de una investigación penal.

A este respecto el Honorable Consejo de Estado ha manifestado:

"no es de recibido el argumento que adujo la Nación (FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN), según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la convención de Derechos Humanos y en la Carta Política, en particular el in dubio pro reo (...)"

*"no puede aceptarse que la falta de actividad probatoria por parte del estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad, se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento."*⁵

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA.
Sentencia N° 25000-23-26-000-1996-01746-01(15980) del 20 de Febrero de 2008.

"LA POSICIÓN ACTUAL DE LA SALA, PLASMADA EN PROVIDENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1997 Y REITERADA RECIENTEMENTE, AMPLIÓ LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, POR CUANTO AHORA EL DAÑO SE CONFIGURA NO SOLO ANTE LA OCURRENCIA DE LOS 3 SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 414 DEL C. DE P. P., SINO TAMBIÉN CUANDO LA ABSOLUCIÓN DEL SINDICADO SE PRODUCE POR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL "IN DUBIO PRO REO", PUES EN LOS CASOS DE DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE UN SINDICADO, QUE CONLLEVEN A SU ABSOLUCIÓN, DEBE ENTENDERSE QUE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUE INJUSTA, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA FE Y DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y QUE, ESA SITUACIÓN - QUE LA PRIVACIÓN SEA INJUSTA - CONSTITUYE UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD COMO ES EL DAÑO, QUE RESULTA, POR TANTO, IMPUTABLE AL ESTADO. EN LOS EVENTOS EN QUE SE DEMUESTRA QUE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUE INJUSTA, SE ESTÁ ANTE UN DAÑO IMPUTABLE AL ESTADO, QUE DEBE SER INDEMNIZADO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CUANDO LAS RAZONES DE ABSOLUCIÓN O DE PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN NO OBEDEZCAN A NINGUNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 414 DEL C. DE P."

⁴ Consejo de Estado – Sentencia del 20 de febrero de 2008; M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra

⁵ Consejo de Estado – Sentencia del 01 de marzo de 2006; M.P. Dr. María Elena Giraldo Gómez

185

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA.
Consejera ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, Bogotá D. C., tres (3) de febrero de dos mil diez (2010), Radicación número: 76001-23-31-000-1996-03203-01(17123).

"En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, y si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado. Se precisa igualmente que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la defensión preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política".

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA SUBSECCION A. Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON, Radicación número: 25000-23-26-000-1997-03509-01(18753).

"Como sea que la decisión absolutoria se fundamentó en la aplicación del principio de in dubio pro reo, porque, según el juzgador en lo penal, existieron insalvables dudas sobre la responsabilidad de la procesada, teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales de esta Corporación, la Sala considera que si hay lugar a predicar la antijuridicidad del daño causado a la señora Delgado Cabrera porque la administración de justicia no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia que constitucionalmente la amparaba no desplegó toda la actividad probatoria para lograr establecer la responsabilidad o la inocencia de la ciudadana vinculada a la investigación penal".

La posición actual de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado en relación al tema de la privación injusta de la libertad es la siguiente:

Una vez perdida la vigencia del artículo 414 del decreto 2700 de 1991, el Consejo de Estado ha considerado que la responsabilidad por privación injusta de la libertad sigue siendo regulada por la ley Estatutaria de Administración de Justicia (ley 270 de 1996), normatividad esta que si bien no contempla expresamente las hipótesis configurativas de privación injusta de la libertad consagrados en el artículo 141 del decreto 2700 de 1991 ya señalados, en el evento de configurarse cualquiera de ellos, la responsabilidad sigue siendo de carácter objetiva, en tanto son expresión de daño antijurídico, pues supone considerar que la misma autoridad judicial reconoció, que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, lo que torna así la detención preventiva a que fue sometida la víctima en un daño que no se tiene el deber jurídico de soportar. En relación con esta postura se pronunciara inicialmente el Consejo de Estado en Sentencia de 2 de mayo de 2007:

"como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 (y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por

196

falla del servicio de Administración de Justicia), esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

"Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado - a la que se hizo referencia en apartado precedente (responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal) ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996".

Esta tesis del Honorable Consejo de Estado ha sido refrendada en sentencias posteriores:

"Ha de precisarse que en el caso de autos, la privación de la libertad se inició el 25 de septiembre del año 1996, fecha para la cual ya estaba vigente la ley 270 de 1996, la cual fue promulgada el 7 de marzo de ese año, por lo que el artículo 414 del decreto 2700 de 1991, había perdido su vigencia, luego, por haber sido derogado, no está llamado a seleccionarse para resolver este concreto caso, pues, vigente la ley estatutaria de la administración de justicia, la cual regula íntegramente lo referente a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, se ésta la normativa a cuyo amparo han de solucionarse tales casos y no una norma derogada.

En efecto, la LEAJ, en el artículo 65 establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, y en el artículo 68 determina que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

Normatividad esta que si bien no contempla expresamente los casos consagrados en el artículo 414 del decreto 2700 de 1991 ya señalados, en el evento de configurarse cualquiera de ellos, la responsabilidad sigue siendo de carácter objetivo, en atención a que la propia justicia penal en la sentencia de carácter absolutoria, reconoce haber incurrido en error al privar de la libertad al procesado, toda vez que de conformidad con los artículos 388 y 389 de

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente: 15.463.

187

dicho código, para su procedencia menester es que se encuentre acreditado i) la existencia del hecho, ii) que este se pueda calificar como delito – tipicidad – y iii) y que exista al menos un indicio grave de responsabilidad del sindicado como autor o partícipe, por lo que al proferirse sentencia absolutoria con fundamento en que el hecho no existió, o que es atípico, o que el procesado no lo cometió, no se está haciendo otra cosa que reconocer la existencia de un error por parte de la propia jurisdicción al momento de proferirse la decisión en virtud de la cual se priva de la libertad al procesado, al resolverse su situación jurídica.

Por manera que, al incurrirse en un error jurisdiccional, declarado así por la propia justicia penal en la sentencia penal absolutoria, no tiene objeto alguno que la jurisdicción de lo contencioso administrativo vuelva a evaluar la configuración de dicho error.

Ahora bien, de todas maneras, en tales circunstancias se está ante la ocurrencia de un daño antijurídico, puesto que ningún coasociado está en la obligación de soportar una privación de la libertad con ocasión de una decisión judicial al ser investigado penalmente, cuando el hecho punible por el cual se le investigó y privó de la libertad, la propia justicia penal verifica su inexistencia, tampoco cuando la conducta que se investigó y por la cual se le privó de la libertad no está descrita en la ley penal como punible – es atípica –, es decir, ni siquiera es delito y por tanto no interesa al derecho penal, igual sucede cuando la propia justicia penal reconoce que el procesado no cometió el delito por el cual se le privó de la libertad, de tal suerte que, a más de configurarse en esos casos, crasos errores jurisdiccionales, por contera se vulnera el sacro derecho no solo de la libertad, sino también del debido proceso, la dignidad humana y la injusticia salta a la vista, desbordándose las cargas públicas soportables por el ciudadano por el hecho de vivir en sociedad, tornándose en un daño antijurídico y por tanto de naturaleza indemnizable⁷,⁸.

De igual manera, respecto a que esta forma de responsabilidad patrimonial del Estado sigue siendo objetiva, aún después de la derogatoria del artículo 414 del decreto 2700 de 1991, en otra oportunidad dijo la sala:

“En el estado actual de la jurisprudencia no se discute el carácter objetivo⁹ de la responsabilidad estatal cuando, no obstante la privación de su libertad, el implicado es absuelto o se precluye la investigación a su favor, en los casos previstos en el art. 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es cuando se establece que i) el hecho no existió, (ii) el encartado no lo cometió y/o (iii) la conducta no es típica.

En este sentido, la jurisprudencia de la sección concibe objetiva la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive una vez derogado el art. 414 eiusdem, no como aplicación ultractiva del citado decreto 2700, sino de los supuestos previstos en él¹⁰, en razón de la responsabilidad estatal en los términos del artículo 90 constitucional y de la ley 270 de 1996”¹¹.

⁷ Sobre el particular, consultar la sentencia de 23 de mayo de 2012, expediente 22672, C.P. Dra. Olga Mérida Valle de la Hoz, (nota de sala).

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de siete (7) de junio de dos mil doce (2012), Consejera Ponente: Olga Mérida Valle de la Hoz, radicación número: 25000-23-26-000-1999-01121-01(22016).

⁹ Sentencia del 15 de septiembre de 1994, exp. 9.391 (nota de sala).

¹⁰ En sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 19.312, se dijo: “(...) la sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado: sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no existió, el investigado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho

188

Y mas recientemente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha insistido que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del decreto 2700 de 1991, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicadas a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, en la medida que son expresión de daño antijurídico:

"según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política"¹².

En conclusión para el Consejo de Estado no desapareció el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad por el hecho de la derogatoria del artículo 414 del decreto 2700 de 1991, en tanto las hipótesis contempladas en esta norma son expresión del daño antijurídico contemplado en el artículo 90 de la Constitución Política, y por ello siguen siendo aplicables cuando se produce la exoneración de la responsabilidad penal por cualquiera de estas causales.

Finalmente el Honorable Consejo de Estado a través de la Sección Tercera por medio de acta del 28 de agosto de 2014 unifico jurisprudencia con relación al tema del valor de los perjuicios morales para privación injusta de la libertad, de la siguiente manera:

2.3 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

En los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo - Rad. No. 25.022, y se complementan los criterios allí adoptados, de acuerdo con la evolución jurisprudencial de La Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

punible el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa". (nota de la sala)

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de tres (3) de diciembre de dos mil doce (2012), Consejero Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, radicación número: 25000-23-26-000-1998-02512-01(25571).

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de treinta (30) de enero de dos mil trece (2013), Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Radicación número: 85001-23-31-000-2001-00056-01(25324)

189

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad	Victima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidad	Parientes en el 2° de consanguinidad	Parientes en el 3° de consanguinidad	Parientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2°	Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses		50% del Porcentaje de la Victima directa	35% del Porcentaje de la Victima directa	25% del Porcentaje de la Victima directa	15% del Porcentaje de la Victima directa
	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV
Superior a 18 meses	100	50	35	25	15
Superior a 12 e inferior a 18	90	45	31,5	22,5	13,5
Superior a 9 e inferior a 12	80	40	28	20	12
Superior a 6 e inferior a 9	70	35	24,5	17,5	10,5
Superior a 3 e inferior a 6	60	25	17,5	12,5	7,5
Superior a 1 e inferior a 3	35	17,5	12,25	8,75	5,25
Igual e inferior a 1	15	7,5	5,25	3,75	2,25

2.4 REGLAS DE EXCEPCIÓN PARA TODOS LOS CASOS DE DAÑOS MORALES

En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

Con relación al tema de los perjuicios morales el Honorable Consejo de Estado reconoce los perjuicios morales tanto para la víctima directa, como a sus familiares más cercanos, estableciendo una tasación diferenciada entre estos que oscila hasta los 100 salarios mínimos mensuales, que establece el juez acudiendo al arbitrio judicial, y para ello debe tenerse en cuenta la afectación moral que la privación injusta de la libertad tuvo en los demandantes, y no el número de días que estuvo preso, como impropriamente lo viene aplicando alguna de las subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

"para la determinación de la cuantía de la indemnización del perjuicio moral, la sala se guiará por la proporción valor – tiempo que ha desarrollado en su jurisprudencia más reciente en los casos de privación injusta de la libertad. Al respecto se ha considerado que es necesario establecer (...) el valor que, en promedio, se concede al mes de privación de libertad, atendiendo únicamente al factor temporal, sin perjuicio de que otras circunstancias concurrentes obliguen a reconocer una cifra más alta, y atendiendo al precedente jurisprudencial en virtud del tope indemnizatorio para el perjuicio moral es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...) De acuerdo con estos parámetros, el promedio del valor correspondiente a un mes de privación de libertad, reconocido por la Sala, es de 5.1 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se aplica dicho criterio temporal de cuantificación a la situación del señor José Rubiel Sánchez Sánchez, se tiene que el valor de la indemnización que debe reconocerse por su perjuicio moral es de 84.45 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicho valor se obtiene de convertir a meses el periodo de la detención (un año, cuatro meses y 20 días equivale a 16.56 meses) y multiplicarlo por el valor del promedio indicado".

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia del 28 de febrero de 2013, consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth (E), Exp. 18001-23-31-000-1998-00147-01 (24622)

190

Pues es lo cierto que un solo día de privación injusta de la libertad puede marcar para siempre a una persona, máxime en las condiciones de reclusión en nuestro medio, que supone violencia física y psicológica en las cárceles, oprobio, afrenta, y menoscaba la dignidad y afecta el buen nombre tanto de la víctima directa como de su familia; por ello insistimos en que para su cuantificación no es dable establecer un racero que tenga en cuenta el número de días que estuvo privado de la libertad, como si los sentimientos pudieran medir cual si se tratara de una operación matemática, sino por la incidencia, la repercusión moral que esta tuvo en sus ser y en su familia.

Por ello, contrario al criterio anterior, encontramos la sentencia de 6 de abril de 2011 que ordenó pagar: "90 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor (...) y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demás demandantes..."¹³, sin tener en cuenta ningún cálculo matemático para cuantificar el perjuicio moral.

Igualmente se encuentra una sentencia donde por 6 días de detención injustificada se ordenó reconocer 20 salarios mínimos legales mensuales a la víctima:

"Por otra parte, teniendo en cuenta que el señor Villamil Valderrama estuvo privado de la libertad 6 días, y que en materia de perjuicios morales la jurisprudencia de la Sala ha reconocido el monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en aquellas eventos en los que se presume el máximo grado de dolor, como cuando se trata de la muerte de un padre o de un hijo, se reconocerá a favor de este demandante, el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes."¹⁴

Lo que supone reconocer que en este tipo de eventos el monto del perjuicio moral no debe obedecer a raceros aritméticos que prefija a manera de baremos una cantidad de salarios mínimos legales por cada mes de detención, sino que se ha determinar por la repercusión moral que tiene el hecho dañino en la víctima, así haya estado un solo día detenido de manera injusta.

Perjuicio moral que se presume tanto en la víctima directa como en sus familiares, en estos últimos a partir de la prueba del parentesco o de la relación:

"no desconoce el despacho que la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que, por regla general, en los casos de privación injusta de la libertad, para probar el daño moral de los demandantes que ostentan la calidad de familiares de la víctima directa, basta con probar su parentesco con este. Se ha dicho:

"32. En relación con los demandantes (...) y los menores (...), observa la Sala que, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia, la comprobación de la relación marital así como el parentesco cercano con la persona que fue injustamente privada de la libertad, permiten inferir el dolor y la aflicción que tal situación produce en sus familiares más allegados.

33. no obstante, para que proceda el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales a favor de tales demandantes, debe acreditarse el parentesco aducido o en su defecto, aportar pruebas de la relación familiar y cercana en virtud de la cual se sufre la afectación psíquica y emocional derivada del daño padecido por la otra persona".¹⁵, ¹⁶.

¹³ Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 abril de 2011, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, radicación número: 19001233100019990203-01(21.653)

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012), Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth, Radicación número: 07001-23-31-000-1999-00025-01 (16448).

¹⁵ Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección "B", Sentencia de 29 de marzo de 2012, exp. 1999-00025 (16448), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth, Radicación número: 19001-23-31-000-2006-00039-01 (41744).

Y ello debe ser así, pues las reglas de la experiencia demuestran que no sólo el prisionero, sino toda su familia, se afecta en sus sentimientos como consecuencia de una privación injusta de la libertad, siendo suficiente para que nazca la presunción la demostración del parentesco o de la relación.

Entonces, si analizamos los hechos que se cargan a la demandada, se puede ver meridianamente que las autoridades han incurrido en una violación reiterada a los principios que rigen la administración de justicia en un estado de derecho, dando lugar a que ese proceder encaje dentro de lo preceptuado por el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Justicia (Ley 270 de 1996), generando por lo mismo, violación del estatuto penal y de procedimiento aplicable, cometiendo así, faltas gravísimas de las contempladas en el Art. 71 de la Ley 270 de 1996, numerales 1, 2 y 3. A la vez, se ha afectado el debido proceso; se ha violado el Derecho Fundamental a la Libertad de las Personas, todo en detrimento de la eficiencia y celeridad que debe primar en toda investigación penal, visible en las actuaciones procesales que se han debido desplegar en esa investigación.

Sin mayores comentarios, se violó por parte de la Demanda, la Ley Estatutaria de la Justicia (Ley 270 de 1996), y con esa conducta se dio lugar a que se vulneren las normas relativas a la libertad de las personas, al debido proceso, a la celeridad y a la eficiencia de la administración de justicia.

Así, se rompió el equilibrio de las cargas que obligan a los Demandantes respecto a la Demandada, y se expuso a los demandantes a la carga injusta de soportar unos perjuicios derivados directa y necesariamente de la lesión de que se ha dado noticia en la demanda

V. COMPETENCIA

Conforme con lo establecido en el Título IV, Capítulo III, artículos 155 numeral 6, 156 numeral 6 y 157 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo ley 1437 de 2011, Es competente en primera instancia para conocer de este proceso el Juez Administrativo del Circuito judicial de Guadalajara de Buga, por la naturaleza de la acción, por el lugar donde ocurrieron los hechos, por la cuantía de las pretensiones, y dado que los perjuicios de orden material no superan los **sesenta y ocho millones setecientos noventa y tres mil pesos (\$68.793.000)**, es decir son inferiores a la suma de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes y la mayor parte de los por perjuicios son de orden moral, es usted señor juez competente para conocer del presente proceso en primera instancia.

VI. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA

Estimo las razones de la cuantía de las pretensiones en la suma de **trescientos setenta y ocho millones ochenta y un mil pesos (\$378.081.000)** equivalentes a quinientos ochenta y seis punto siete SMLMV 2015.

Para establecer la cuantía de la demanda a la fecha de presentación de la misma conforme con el artículo 157 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo ley 1437 de 2011, me permito presentar la liquidación de las pretensiones al momento de presentar la demanda, aclarando que la mayor parte de las pretensiones son de orden moral, y la suma de los perjuicios materiales es solo **sesenta y ocho millones setecientos noventa y tres mil pesos (\$68.793.000)**

6.1. JOSE MARIA MEZA MEZA (VICTIMA)

Por perjuicios materiales:

Daño emergente.

- a) Pago de honorarios profesionales para la defensa en el proceso penal.

\$20.000.000

- b) Pago de parqueadero del camión en los patios del parqueadero autorizado por la Fiscalía General de la nación, correspondiente al tiempo transcurrido entre el 20 de septiembre de 2012 hasta el 7 de diciembre de 2012 fecha en que la Fiscalía autorizó la entrega del vehículo.

\$1.000.000

- c) Pago de parqueadero del camión en parqueadero en Bogotá, correspondiente al tiempo transcurrido entre el 15 de diciembre de 2012 hasta el 15 de julio de 2013.

\$1.168.000

Lucro Cesante.

- a) Los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, esto es nueve meses y veintisiete días, liquidados a razón de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000) que es el salario promedio que percibía el señor José María Meza Meza fruto de su actividad como transportador de carga, de acuerdo a lo que se probara con los estados financieros y las certificaciones de movimiento de carga presentadas como prueba en el proceso.

\$24.750.000

- b) Se le debe cancelar al demandante los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo cesante después de terminar su reclusión en centro carcelario, en ese orden de ideas de acuerdo a la planteado por el Honorable **CONSEJO DE ESTADO**, según la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses), lo que equivale que para José María Meza Meza, el periodo de reubicación laboral, liquidado liquidados a razón de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000) que es el salario promedio que percibía el señor José María Meza Meza fruto de su actividad como transportador de carga, de acuerdo a lo que se probara con los estados financieros y las certificaciones de movimiento de carga presentadas como prueba en el proceso.

\$21.875.000

Total perjuicios materiales: sesenta y ocho millones setecientos noventa y tres mil pesos (\$68.793.000)

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad que es mayor de nueve meses pero inferior a doce meses.

Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (\$51.548.000) equivalentes a Ochenta

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

193

Resumen de los perjuicios a favor del señor José María Meza Meza

Materiales.

\$68.793.000.00

Morales

\$51.548.000.00

Total indemnización respecto del señor José María Meza Meza, la suma de ciento veinte millones trescientos cuarenta y un mil pesos (\$120.341.000), que equivalen a ciento ochenta y seis punto setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2015.

6.2. ERMINDA CASTAÑEDA VILLAMIL (compañera permanente de José María Meza Meza)

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad, y teniendo en cuenta que se trata de la compañera permanente de la víctima.

Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (\$51.548.000) equivalentes a Ochenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

Total indemnización a favor de la señora Erminda Castañeda Villamil: Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (\$51.548.000) equivalentes a ochenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

6.3. YOHANNA AISLEN MEZA CASTAÑEDA. (hija de José María)

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad, y el grado de consanguinidad o de afinidad del familiar, teniendo en cuenta que se trata de la hija.

Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (\$51.548.000) equivalentes a Ochenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

Total indemnización a favor de la señora Yohanna Aislen Meza Castañeda: Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (\$51.548.000) equivalentes a ochenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

6.4. ILBA YANETH MEZA CASTAÑEDA. (hija de José María)

194

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad, y el grado de consanguinidad o de afinidad del familiar, teniendo en cuenta que se trata de la hija.

Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (\$51.548.000) equivalentes a Ochenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

Total indemnización a favor de la señora Ilba Yaneth Meza Castañeda: Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (\$51.548.000) equivalentes a ochenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

6.5. HANS PETER HERNANDEZ HERRERA. (yerno de José María)

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad, y el grado de consanguinidad o de afinidad del familiar, teniendo en cuenta que se trata del yerno de la víctima.

Doce Millones ochocientos ochenta y siete mil pesos (\$12.887.000) equivalentes a Veinte Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

Total indemnización a favor del señor Hans Peter Hernández Herrera, la suma de Doce Millones ochocientos ochenta y siete mil pesos (\$12.887.000) equivalentes a Veinte Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

6.6. JOSE GREGORIO LASTRE VEGA. (yerno de José María)

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad, y el grado de consanguinidad o de afinidad del familiar, teniendo en cuenta que se trata del yerno de la víctima.

Doce Millones ochocientos ochenta y siete mil pesos (\$12.887.000) equivalentes a Veinte Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

195

Total indemnización a favor del señor José Gregorio Lastre Vega, la suma de Doce Millones ochocientos ochenta y siete mil pesos (\$12.887.000) equivalentes a Veinte Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

6.7. JERONIMO HERNANDEZ MEZA. (nieto de José María)

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad, y el grado de consanguinidad o de afinidad del familiar, teniendo en cuenta que se trata del nieto de la víctima.

Veinticinco millones setecientos setenta y cuatro mil pesos (\$25.774.000) equivalentes a Cuarenta salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

Total indemnización a favor de Jerónimo Hernández Meza, la suma de Veinticinco millones setecientos setenta y cuatro mil pesos (\$25.774.000) equivalentes a Cuarenta salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

6.8. JUAN JOSE LASTRE MEZA. (nieto de José María)

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad, y el grado de consanguinidad o de afinidad del familiar, teniendo en cuenta que se trata del nieto de la víctima.

Veinticinco millones setecientos setenta y cuatro mil pesos (\$25.774.000) equivalentes a Cuarenta salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

Total indemnización a favor de Juan José Lastre Meza, la suma de Veinticinco millones setecientos setenta y cuatro mil pesos (\$25.774.000) equivalentes a Cuarenta salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

6.9. VERONICA LASTRE MEZA (Nieta de José María)

Por perjuicios morales:

Subjetivados.

De acuerdo a la sentencia de unificación en relación con el pago de perjuicios morales a quien ha sido privado de la libertad y es posteriormente absuelto y con relación al tiempo que perduro la privación de la libertad, y el grado de consanguinidad o de afinidad del familiar, teniendo en cuenta que se trata de la nieta de la víctima.

Veinticinco millones setecientos setenta y cuatro mil pesos (\$25.774.000) equivalentes a Cuarenta salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015. 196

Total indemnización a favor de Verónica Lastre Meza, la suma de Veinticinco millones setecientos setenta y cuatro mil pesos (\$25.774.000) equivalentes a Cuarenta salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año 2015.

SUMATORIA TOTAL DE LAS PRETENSIONES:

La sumatoria total de las pretensiones es de trescientos setenta y ocho millones ochenta y un mil pesos (\$378.081.000) equivalentes a quinientos ochenta y seis punto siete SMLMV 2015.

VII. PRUEBAS:

7.1. Documentales: Allego las siguientes pruebas documentales:

ÍTEM	DETALLE	CALIDAD *	Fls
7.1.1	Poder conferido por los señores José María Meza Meza y Erminda Castañeda Villamil con presentación de firma ante notaria.	1	1
7.1.2	Poder conferido por los señores Yohanna Aislen Meza Castañeda y Hans Peter Hernández Herrera con presentación de firma ante Notaria, donde además otorgan poder en nombre de su hijo Jerónimo Hernández Meza.	1	1
7.1.3	Poder conferido por los señores Ilba Yaneth Meza Castañeda y José Gregorio Lastre Vega, con presentación de firma ante Notario, donde además confieren poder en nombre de sus hijos Juan José Lastre Meza y Verónica Lastre Meza.	1	1
7.1.4	Fotocopia simple de cédula de ciudadanía del señor José María Meza Meza.	3	1
7.1.5	Fotocopia simple de cédula de ciudadanía de la señora Erminda Castañeda Villamil, compañera permanente de José María Meza Meza.	3	1
7.1.6	Declaración extrajudicial de convivencia rendida ante el notario 66 de Bogotá, por los señores José María Meza Meza y Erminda Castañeda Villamil.	1	1
7.1.7	Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía de Ilba Yaneth Meza Castañeda, hija de José María.	3	1
7.1.8	Copia autentica del folio de registro civil de nacimiento de Ilba Yaneth Meza Castañeda.	1	1
7.1.9	Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del señor José Gregorio Lastre Vega, yerno de José María.	3	1
7.1.10	Copia del registro civil de matrimonio de Ilba Yaneth y José Gregorio.	3	1
7.1.11	Copia autentica del registro civil de nacimiento de Juan José Lastre Meza.	1	1
7.1.12	Copia simple de la tarjeta de identidad del menor Juan José Lastre Meza	3	1
7.1.13	Copia autentica del registro civil de nacimiento de la menor Verónica Lastre Meza	1	1
7.1.14	Copia simple de la tarjeta de preparación de tarjeta de identidad de Verónica Lastre Meza	3	1
7.1.15	Copia simple de la cédula de ciudadanía de la señora Yohanna Aislen Meza Castañeda	3	1
7.1.16	Copia autentica del registro civil de nacimiento de Yohanna Aislen Meza Castañeda.	1	1
7.1.17	Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del señor Hans Peter Hernández Herrera.	3	1
7.1.18	Declaración extrajudicial de convivencia rendida ante notario por los señores Yohanna Aislen Meza Castañeda y Hans Peter Hernández Herrera	1	1
7.1.19	Copia autentica del registro civil de nacimiento del menor Jerónimo Hernández Meza.	1	1
7.1.20	Fotocopia simple de la tarjeta de identidad del menor Jerónimo Hernández Meza.	3	1
7.1.21	Informe de valoración psicológica efectuado por el profesional en psicología doctora Laura Hernández Duarte, quien valoro a los señores José María Meza Meza, Erminda Castañeda Villamil, Yohanna Aislen Meza Castañeda, Hans Peter Hernández Meza y el menor Jerónimo Hernández Meza.	1	15
7.1.22	Informe de valoración psicológica efectuado por el profesional en psicología doctor Bernardo Ottavo Reyes, quien valoro a los señores Ilba Yanethh Meza Castañeda, José Gregorio Lastre Vega, y los menores Juan José Lastre Meza y Verónica Lastre Meza.	1	7
7.1.23	Recibo de pago de honorarios por valor de \$10.000.000 suscrito por el doctor Jaime Rico Rojas, de fecha 21 de septiembre de 2012.	1	1
7.1.24	Recibo de pago de honorarios por valor de \$10.000.000 suscrito por el doctor Jaime Rico Rojas, de fecha 25 de enero de 2013.	1	1
7.1.25	Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el señor José María Meza y el doctor Jaime Rico Rojas.	1	3

197

7.1.26	Recibo No. 0752 correspondiente al pago de parqueadero por el tiempo que el vehículo estuvo en el parqueadero autorizado por la fiscalía general de la nación, por valor de \$1.000.000.	1	1
7.1.27	Recibos varios de pago correspondientes a los meses que el vehículo estuvo parado en la ciudad de Bogotá, por pago de mensualidad de parqueadero. \$1.168.000	1	1
7.1.28	Original del contrato de arrendamiento del vehículo automotor suscrito entre el señor José María Meza Meza y su hija Yohanna Aislen Meza Castañeda.	1	6
7.1.29	Certificado De tradición y de libertad correspondiente a la matrícula inmobiliaria No. 50S-40467551 expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Bogotá, respecto del bien inmueble ubicado en la transversal 1 No. 68B – 44. Este documento demuestra la propiedad del inmueble de los señores José María Meza Meza y Erminda Castañeda Villamil desde muchos años atrás hasta la actualidad.	1	2
7.1.30	Contrato de arrendamiento de fecha enero de 2009 donde el señor José María Meza alquila a José Gregorio Lastre. Uno de los apartamentos de los que conforma su vivienda. (\$360.000)	1	1
7.1.31	Contrato de arrendamiento de fecha enero de 2009 donde el señor José María Meza alquila a Hans Peter Hernández Herrera, uno de los apartamentos de los que conforma su vivienda. (\$360.000)	1	1
7.1.32	Contrato de arrendamiento de fecha enero de 2010, por el cual el señor José María Meza alquila a José Gregorio Lastre, uno de los apartamentos de los que conforma su vivienda. (\$380.000)	1	1
7.1.33	Contrato de arrendamiento de fecha enero de 2010, por el cual el señor José María Meza alquila a Hans Peter Hernández Herrera, uno de los apartamentos de los que conforma su vivienda. (\$380.000)	1	1
7.1.34	Contrato de arrendamiento de fecha enero de 2011, por el cual el señor José María Meza alquila a Hans Peter, uno de los apartamentos de los que conforma su vivienda. (\$415.000)	1	1
7.1.35	Contrato de arrendamiento de fecha enero de 2011, por el cual el señor José María Meza alquila a José Gregorio Lastre, uno de los apartamentos de los que conforma su vivienda. (\$415.000)	1	1
7.1.36	Contrato de arrendamiento de fecha enero de 2012, el señor José María Meza alquila a Hans Peter Hernández Herrera, uno de los apartamentos de los que conforma su vivienda. (\$420.000)	1	1
7.1.37	Contrato de arrendamiento de fecha enero de 2012, el señor José María Meza alquila a José Gregorio Lastre Vega, uno de los apartamentos de los que conforma su vivienda. (\$420.000)	1	1
7.1.38	Estados financieros del señor José María Meza con relación al año fiscal 2011, expedido por la contador público Martha Isabel Téllez García, donde se evidencia que los ingresos del señor José María Meza para ese año por orden de arrendamientos y de su actividad como conductor de camión son por el orden de dos millones quinientos mil pesos mensuales.	1	3
7.1.39	Estados financieros del señor José María Meza con relación al año fiscal 2012, expedido por la contador público Martha Isabel Téllez García, donde se evidencia que los ingresos del señor José María Meza para ese año hasta la fecha de la detención, por orden de arrendamientos y de su actividad como conductor de camión son por el orden de dos millones quinientos mil pesos mensuales.	1	3
7.1.40	Certificación rendida por la señora Silvia Aya Montero jefe administrativa de la empresa Transvitel SAS, donde certifica que el señor José María Meza les presta el servicio de transporte de carga en el camión Ford de placas YHK 296 y que por ello percibe unos ingresos mensuales promedio de valor de \$2.500.000	1	1
7.1.41	Certificación rendida por el señor Juan Caipe Casanova jefe de la empresa Distribuidora Nacional de Mercancías DINAMER LTDA, donde certifica que el señor José María Meza les presta el servicio de transporte de carga a nivel urbano y nacional desde hace aproximadamente 7 años y que ha demostrado ser una persona responsable y cumplidora de los deberes.	1	1
7.1.42	Certificación rendida por el señor John Jairo Castaño jefe de logística Comercial de la empresa T ARGA soluciones en movimiento, donde certifica que el señor José María Meza les presta el servicio de transporte de carga en el camión Ford de placas YHK 296 y que por ello percibe unos ingresos mensuales promedio de valor de \$2.500.000.	1	1
7.1.43	Certificación rendida por la señora Nancy Báez, gerente administrativa de la empresa TRANSPORTES MULTILINEA LTDA, donde certifica que el señor José María Meza les presta el servicio de transporte de carga a nivel urbano y nacional desde hace aproximadamente 9 años y que ha demostrado ser una persona responsable y cumplidora de los deberes.	1	1
7.1.44	Oficio dirigido al juzgado segundo penal del circuito de fecha 1 de junio de 2015 donde se solicita la copia del proceso penal.	1	1
7.1.45	Copia de CD contentivo de las audiencias del proceso penal. Expedido por el juzgado segundo penal del circuito	1	1
7.1.46	Copias auténticas del proceso penal expedidas por el juzgado segundo penal del circuito de Tuluá.	2	74
7.1.47	Constancia de conciliación fallida de fecha 17 de septiembre de 2015, expedida por el doctor Eduardo Silva Orozco, Procurador 60 judicial I para asuntos administrativos.	1	2

* Calidad de los documentos: 1: Original; 2: Copia Auténtica; 3: Copia Simple

198

VIII. ANEXOS:

Además de las relacionadas en el acápite de Pruebas, anexo:

- Poder debidamente conferido con nota de presentación personal.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a los demandados.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la agencia nacional de defensa jurídica del estado.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado al ministerio público.
- Copia simple de la demanda para el archivo del despacho.
- CD con el archivo magnético de la demanda.

IX. DERECHO:

Invoco como normas aplicables además de las citadas en la demanda los artículos 2, 5, 6, 13, 28, 29 y 90 de la Constitución Política; la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1.972, en lo que se refiere a la libertad y seguridad personal; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1.968; el Código Penal en lo atinente a los delitos contra la libertad individual y otras garantías; el Código de Procedimiento Penal; EL Estatuto de la Administración de Justicia, vigente para la época –Ley 270 de 1996, arts. 23, 27, 65 a 74-; artículo 140 de la ley 1437 de 2011 CPACA, y demás normas que regulan la materia, así como la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y de la Honorable Corte Constitucional.

X. NOTIFICACIONES:

La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia en la calle 72 No. 7 96 de Bogotá, teléfono 312 70 11.

La Fiscalía General de la Nación en la diagonal 22 B No. 52 – 01 Ciudad Salitre – Bogotá, teléfonos 570 20 00 – 414 90 00.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la carrera 7 No. 75 – 66 piso 2 y 3 de Bogotá. Teléfono. 2558955.

A los convocantes señores **José María Meza Meza, Ermininda Castañeda Villamil, Yohanna Aislen Meza Castañeda, Hans Peter Hernández Herrera, Ilba Yaneth Meza Castañeda, José Gregorio Lastre Vega**, se les puede notificar en la transversal 1 No 68B – 44 sur de Bogotá. Cel. 3106695350.


Al suscrito apoderado, en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 26 No. 26 – 39 oficina 207 edificio los profesionales de la ciudad de Tuluá. Celular 3135966920 - 3175423394.

Para los efectos del artículo 198 del CPACA Ley 1437 de 2011 notifíquese al señor agente del ministerio público en su respectiva oficina.

Señor juez por estar reunidos los requisitos del artículo 162 del CPACA le ruego sea admitida la presente demanda y se ordene correr los traslados de rigor.

Del señor Juez,

Atentamente,


WILLIAM ALEJANDRO APONTE LONDOÑO
C.C. No. 89.005.695 de Armenia – Quindío
T. P. No. 153.143 del C. S. de la J.

